

INICIATIVA FORMULADA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE REFORMAR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 80. DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (ELD 40/LXV-I)

ORDENAMIENTO INICIATIVA OBSERVACIONES		
		OB\$ERVACIONE\$
Artículo 80 La Procuraduría tendrá las siguientes	Artículo 8o La Procuraduría tendrá las siguientes	PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
atribuciones:	atribuciones:	ESTADO DE GUANAJUATO.
		En fecha 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 102
I a V		apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
		Mexicanos, que regula el sistema de protección no
VI Formular recomendaciones públicas, no	VI Formular recomendaciones públicas, que tratándose	jurisdiccional de los derechos humanos, que a la letra
vinculatorias, previo el trámite que establece la presente	de la Fiscalía General del Estado y las autoridades de	dispone:
Ley por violaciones a los derechos humanos;	seguridad pública municipal y estatal, serán vinculatorias,	
	previo el trámite que establece la presente Ley por	El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
	violaciones a los derechos humanos; en los demás casos	establecerán organismos de protección de los derechos
	y materias no serán vinculatorias:	humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que
		conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier
VII a XX		autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder
		Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
		Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,
		formularán recomendaciones públicas, no
		vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder
		las recomendaciones que les presenten estos organismos.
		Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o
		cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además,
		la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión
		Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas,
		según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos
		responsables para que comparezcan ante dichos órganos
		<u>legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su</u>
		<u>negativa</u> .
		En consonancia con lo anterior, la Constitución Política para
		el Estado de Guanajuato, en su numeral 4, quinto párrafo
		señala lo siguiente:
		El organismo estatal de protección de los Derechos Humanos,
		formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias,
		denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo
		servidor público está obligado a responder, por escrito, las recomendaciones que le presente este organismo.



ORDENAMIENTO	INICIATIVA	OB\$ERVACIONE\$
		Por lo anteriormente expuesto, y sin soslayar la intención de hacer vinculantes las resoluciones de recomendación emitidas por la PRODHEG a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades de seguridad pública municipal y estatal, la propuesta planteada se considera que contraviene lo señalado expresamente en el artículo 102, apartado B de la Carta Fundamental y lo establecido en el artículo 4° de la Constitución local. En el mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las comisiones de derechos humanos constituyen un medio eficaz de protección jurídica de los derechos humanos que no sustituye -ni es su finalidad sustituir- a los recursos de naturaleza judicial, sino que los apoya y complementa con celeridad y de manera preventiva¹.
		FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Derivado del estudio de la justificación de la Iniciativa, misma que centra su argumento en señalar que «ante la violación acreditada en las correspondientes investigaciones que hacen las instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el mecanismo protector, tenga la potestad de hacer obligatoria su determinación, conocida como recomendaciones. [] se considera oportuno y necesario proponer que las recomendaciones emitidas por dicha Procuraduría, tengan el carácter de vinculantes, para la Fiscalía General del Estado y las instituciones municipales y estatal de seguridad pública, en aras de hacer vigentes los derechos humanos de acceso a la justicia y la integridad física, principalmente» (sic), con independencia de diversas consideraciones exegéticas y jurídicas que resultarían aplicables dada la naturaleza y alcance de lo pretendido, es de comentar lo siguiente:

¹ Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 448/2015, párrafo. 121. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntolD=179758



ORDENAMIENTO	INICIATIVA	OB\$ERVACIONE\$
		Atendiendo al contenido de la Carta Magna, y sustancialmente a nuestra inclusión como Entidad Federativa en un sistema federado, en el cual nuestras actuaciones se someten a lo establecido en la misma, en la asignatura que nos ocupa, se debe atender fundamentalmente a dicha Constitución Política Federal, en su artículo 102, Apartado B que establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, crearán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidores públicos, puntualizando que sus recomendaciones públicas, no serán vinculatorias. Así pues, el señalado Apartado B del numeral 102 de la CPEUM, es a su vez la base para la inclusión en el artículo 4 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato (CPEG), del texto relativo a que en nuestra entidad se contará con un organismo de protección de los derechos humanos que formulará recomendaciones que no serán vinculatorias, como a continuación a la letra dice: «Artículo 4. La ley establecerá sistemas de impugnación y medios de defensa de los derechos de los particulares frente a los actos de las autoridades. La ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y procedimientos de un organismo estatal de protección de los derechos humanos, dotado de plena autorionía, que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter estatal o municipal que violen estos derechos, formulará acuerdos o recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este organismo no será competente para conocer de quejas que se originen con motivo de acuerdos o decisiones de instancias electorales, ni tratándose de resoluciones de naturaleza jurisdicicional; pero podrá conocer de asuntos d



	El organismo estatal de protección de los Derechos Humanos, formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder, por escrito, las recomendaciones que le presente este organismo» (Lo destacado no es de origen). Bajo tal tesitura, con base en ambos textos constitucionales,
	y toda vez que la Iniciativa que nos ocupa no debe entenderse/analizarse de manera aislada e independiente de nuestro sistema constitucional (federal y local), el introducir las adecuaciones que se busca al artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, sería contrario a tales fundamentos y mandamientos constitucionales, por lo que no solo sería improcedente, sino inconstitucional. Por tales motivos, se estima que la Iniciativa propuesta sería inviable.
	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS. e) Conclusiones
	Como se ha planteado en el desarrollo de esta opinión y concurrente a lo expresado por el iniciante en su exposición de motivos, al referirse a uno de los puntos de amplio debate sobre esta cuestión, que tiene en realidad como eje fundamental, la voluntad política de cada Estado, para llevar las recomendaciones emitidas por las instancias gubernamentales, al nivel de hacerlas vinculantes, para el debido acatamiento de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pronunciadas especialmente para la Fiscalía General del estado y las autoridades de Seguridad Publica municipal y estatal, coincidimos con el encomiable propósito de incluir el término vinculante en la fracción VI del artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos, sin embargo apreciamos, que la simple inserción de la palabra vinculante no permitirá dar mayor vigencia real a los derechos humanos, como se insinúa en el rubro del impacto social,



ORDENAMIENTO	INICIATIVA	OB\$ERVACIONE\$
		todos los ámbitos, obedecidas y aplicadas, es decir, la eficacia en el derecho es condición de obligatoriedad, no tendría sentido hacer leyes que no obliguen, como normas sin validez, luego entonces, la eficacia del Derecho alude al cumplimiento de la norma, es decir, que en efecto se sigue, obedece y aplica. En otras palabras, que lo prescrito por la norma jurídica se puede constatar en la realidad de los hechos, sin necesidad de atribuirle expresamente, la cualidad de vinculante, su omisión no significa, inactividad de la autoridad para intervenir, atender y promover el cumplimiento de la ley, para cualquiera de los sujetos obligados por la Recomendación y ofrecer a la ciudadanía la seguridad jurídica, que parte del principio de certeza en cuanto a la aplicación de las disposiciones constitucionales como legales que, a un tiempo definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la diligencia que se haga del orden jurídico a los gobernados será eficaz, con la garantía, de que su persona, familia, posesiones o derechos serán respetados por la autoridad, o en su caso deberán ajustarse a los procedimientos establecidos por los ordenamientos jurídicos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004)
		principios generales del derecho, donde hay la misma razón, se aplica la misma disposición, todos, autoridades y ciudadanos deben ser idénticos ante la ley y ésta debe aplicarse para todos por igual, ninguna institución gubernamental, es más o menos que otra, y por tanto atribuirle a la procuraduría esta propuesta "potestativa" de vinculante a sus decisiones, se transformaría en un organismo jurisdiccional y por ende en un tribunal, contrario al motivo de su fundación y las complicaciones que ello motivaría. En complemento a lo explicado, es oportuno reiterar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conoce de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los estados.



ORDENAMIENTO	INICIATIVA	OB\$ERVACIONE\$
		Sin dejar de reconocer la valía de la iniciativa, consideramos no viable la reforma que se plantea a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el estado.
	Artículo transitorio:	
	ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.	